

El Movimiento Al Socialismo en Bolivia: un ensayo para leer su institucionalización desde la teoría de los movimientos sociales

Por Antonella A. Santin*

Resumen: Este ensayo pretende desarrollar un análisis con perspectiva histórica de la experiencia llevada adelante por el Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia, como expresión de un partido político basado en la consolidación de un movimiento social de masas. Mediante la lucha étnico-política, la iniciativa popular llegó a institucionalizarse asumiendo la gestión del Estado en el año 2006. Dicho proceso será recuperado esbozando posibles respuestas a las preguntas claves que guían los estudios de los movimientos sociales. Estas se vinculan con el motivo de surgimiento de los mismos; la estructura de oportunidades políticas que dan lugar a su accionar; sus formas de organización y los procesos enmarcadores que han permitido su continuidad y evolución en el tiempo. Para ello, se realizará una aproximación al proceso histórico boliviano, para luego profundizar en el surgimiento y consolidación del MAS como partido político basado en movimientos sociales a partir de los aportes analíticos de Anria (2019). Posteriormente, se analizará el caso utilizando recursos teóricos complementarios del campo de estudio de los movimientos sociales. Para finalizar, se concluirá con algunas reflexiones al respecto.

Palabras clave: Bolivia; Movimiento Al Socialismo (MAS); Partido político basado en movimientos sociales.

* Lic. en Trabajo Social UNLaM. Doctoranda en Ciencias Sociales UBA. Grupo de investigación Desarrollo Regional y Economía Social ([DRYES](#)). Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR). Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Introducción

A partir de 1970 con la implementación de políticas neoliberales en América Latina de la mano de dictaduras cívico-militares, agudizado por el consecutivo despliegue del conocido Consenso de Washington impulsado desde el Norte Global a finales de la década de los '80, se inició una crisis política, económica y social sin precedentes en gran parte de los países del bloque latinoamericano. Con el proceso de globalización y la aplicación de políticas en favor de los intereses concentrados de los principales grupos de poder surgieron, en todos los territorios del Cono Sur, una serie de movimientos sociales con características particulares que consolidaron nuevas demandas a partir de una diversidad de agendas temáticas. De esta manera, las protestas sociales desplegadas desde la idiosincrasia popular en cada punto de la región, promovidas por diferentes actores sociales, originaron nuevas formas de acción colectiva, institucionalidades y estatalidades. Esto dio lugar al inicio del Ciclo Progresista del S XXI, reconfigurando el panorama político y social a nivel nacional y regional.

Considerando este escenario coyuntural, en el presente trabajo interesa ahondar en el análisis con perspectiva histórica de la experiencia llevada adelante por el Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia, como expresión de un partido político basado en la consolidación de un movimiento social de masas (Anria, 2019). Mediante la lucha étnica y política, la iniciativa popular llegó a legitimarse e institucionalizarse a nivel federal hasta alcanzar altos niveles de representatividad política, junto al ejercicio del poder gubernamental mediante la asunción de la gestión del Estado en enero del año 2006. Con este fin, se recuperará este proceso a partir de las preguntas claves en los estudios de los movimientos sociales, vinculadas al origen y al motivo de surgimiento de los mismos, junto a la estructura de oportunidades políticas, sus formas de organización y los procesos enmarcadores (Mc Adam et. al., 1999) que han permitido su continuidad y evolución en el tiempo. En primer lugar, se prioriza realizar una aproximación al proceso histórico, social y político de Bolivia, a modo de poder entender el devenir de los procesos sociopolíticos actuales. Luego se profundizará en el surgimiento y consolidación del MAS Boliviano como partido político basado en movimientos sociales a partir de los aportes de Anria (2019). Posteriormente, se analizará el caso utilizando aportes teóricos complementarios del campo de estudio de los movimientos sociales. Para finalizar, se concluirá con algunas reflexiones al respecto.

La riqueza de analizar la institucionalización del Movimiento al Socialismo en Bolivia mediante estas claves interpretativas se halla en la importancia de revisar los procesos de construcción de un nuevo modelo de Estado, a partir de la propuesta de gobernabilidad propulsada a través de las luchas organizadas, que articulan la memoria larga y la memoria corta de las mayorías populares en post de su liberación y emancipación (Gamboa Villaroel, 2012).

Desarrollo

Aproximación a la historia sociopolítica de Bolivia

A modo de realizar cierto racconto histórico, desde los tiempos coloniales el pueblo boliviano guarda en su memoria colectiva, historias de lucha, resistencia y organización popular. En términos de Gamboa Villaroel (2012), “la emergencia del Estado Plurinacional de Bolivia tiene relación con la memoria larga y la memoria corta” (45) de su pueblo, comprendiendo a la primera como los eventos emancipatorios considerados desde la Colonia hasta la República de mediados del S XX; y a la segunda, como los hechos de movilización popular sucedidos desde ese periodo hasta principios del S XXI. Por este motivo, y por lo clave que resultan estos procesos para la conformación de una nueva propuesta política con una amplia base movimientista, resulta interesante retomar dicha trayectoria histórica en el país.

Entre el Siglo XV y XIX, Bolivia como territorio colonial se constituía en cuna de la explotación de oro y plata, fuente de alimento y sostén reproductor del enriquecimiento de las monarquías durante el proceso colonizador español (Trimboli y Rosemberg, 29/09/2022). Mediante la resistencia indígena y la lucha independentista, consiguió su independencia en 1825 y su posterior constitución como República, viendo los vestigios del desguace extractivista y colonial en las condiciones de sus tierras y sus gentes. Para el siglo XX, Bolivia era un país con altas tasas de desigualdad social: la oligarquía dominante acumulaba gran proporción de riquezas a partir de la explotación del estaño, mientras la mayor parte de la población se encontraba excluida del sistema productivo y del acceso a bienes, servicios y derechos básicos. Esto se expresa en la vigencia de las estructuras coloniales hasta bien entrado el S. XX, donde la figura del pongaje¹ se conformaba como una práctica de crueldad colonial cotidiana, cuestión que puede verse replicada de diversos modos hasta nuestros días.

Para la década de 1950 -Guerra del Chaco mediante²- Bolivia era la segunda economía más pobre de Latinoamérica después de Haití (Dunkerley, 2003). La mayor parte de la población, de origen quechua y aymara, no hablaba castellano, por lo cual la tasa de analfabetismo era mayor al 50% (Trimboli y Rosemberg, 29/09/2022). Dentro de la estructura productiva y económica nacional, el campo como zona productiva se encontraba en desigualdad

¹ El pongaje refiere a un modelo histórico de servidumbre agraria de campesinos/as e indígenas en las haciendas, que se veían obligados a realizar trabajos forzosos en condiciones de semi esclavitud para garantizar su subsistencia mínima, sin acceder a un salario, a la propiedad de la tierra ni a los frutos de su propia producción. En mayo de 1945, durante el primer Congreso Indígena de Bolivia, se decretó la abolición del pongaje y de todas las formas de explotación y prestación gratuita de trabajo en el campo. Pese a esto, los resabios de estas prácticas coloniales se observan en las desigualdades sociales vividas por las comunidades indígenas frente a la vulneración de derechos múltiples en lo que acceso a la tierra, regulaciones laborales y sociales, y tratos deshumanizantes y discriminatorios se trata.

² La Guerra del Chaco alude al conflicto bélico entre Bolivia y Paraguay durante los años 1932-1935 por el control del territorio del Chaco boreal.

de condiciones en contraste con las zonas mineras, que contaban con tecnología aplicada al proceso de producción y explotación del recurso destinado al mercado internacional.

En este marco de profundas desigualdades, la Revolución boliviana nacionalista del año 1952 fue un quiebre en la historia nacional, marcada por el protagonismo obrero-minero y campesino, donde gran parte del pueblo se armó para derrotar al Ejército oligárquico de “La Rosca”. Con un saldo de más de 500 muertos entre el 9 y el 11 de abril del mismo año, se declaró el triunfo de los trabajadores armados organizados detrás del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR). Creado en 1942 con el objetivo de modernizar Bolivia, el Movimiento se conforma en su mayoría por hijos de las clases altas y liberales nacionalistas pertenecientes a la burguesía local, consolidándose a partir de su capacidad de sintonizar con la clase obrera boliviana y los trabajadores de las minas como sector ideológicamente radicalizado. El primer partido político basado en movimientos sociales del país (Anria, 2019) se conforma así a partir de una alianza compleja que marcó su desarrollo en base a disputas internas entre las clases dominantes y la pre-burguesía nacional moderna, siendo la clase obrera quien contrarrestaba al interior del partido la tendencia ideológica conservadora (Zavaleta Mercado, 1986).



*Participación política y Revolución Nacional en Bolivia.
(Fuente imagen: Educa Bolivia)*

Las políticas públicas más relevantes impulsadas entre 1952-1964 por el MNR en el poder fueron la nacionalización de las minas de estaño³; la universalización del sufragio⁴; la

³ Circuito de producción hasta el momento solventado por capitales nacionales privados y extranjeros destinados al mercado externo, que pasa a manos de la administración pública estatal.

⁴ El sufragio universal logra abarcar a mujeres y trabajadores, lo cual amplía la base de sustentación democrática del Estado. Desde la Guerra del Chaco, los gobiernos bolivianos fueron de muy corta duración lo que, considerando las sucesivas dictaduras militares, revela la inestabilidad histórica de la política institucional boliviana desarrollada hasta el momento.

reforma educativa⁵; y la reforma agraria⁶. Estas medidas “ayudaron a incorporar a la política a grandes segmentos de la población, por entonces predominantemente rural” (Anria, 2019), siendo tomadas por el MNR al calor de la revolución, mientras ampliaba su alcance territorial y nacían organizaciones independientes a nivel nacional como la Central Obrera Boliviana (COB). Durante esos años, se proporcionaron nuevos canales para la representación de campesinos y obreros mineros en la política organizada, promoviendo su participación en el sistema político nacional (Crabtree, 2013 de Anria, 2019).

El gobierno del MNR fue derrocado en 1964 mediante un Golpe de Estado cívico-militar⁷, el cual perpetuó un sistema en base a la implementación de políticas neoliberales, el desmantelamiento del sector minero estatal y la apertura del mercado externo hasta fines de la década de los '70. Durante los años posteriores, las organizaciones sindicales se consolidaron y convirtieron en una herramienta clave de organización, participación y movilización del campesinado y de la masa obrera local, mediante el surgimiento de instancias organizativas como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) en 1979; el MAS en 1995 como movimiento social cocalero en la zona del Chapare, y el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), de base aymara en el año 2000. Estas iniciativas colectivas se centraron en la demanda de mejoras respecto a las condiciones laborales en zonas rurales y urbanas; involucrando sectores específicos de trabajo y visibilizando el papel de las y los campesinos indígenas y trabajadores obreros/as en la sociedad.

En la década del '80, se aplicó en Bolivia (como en gran parte de Latinoamérica) la llamada “teoría del shock” o “terapia de choque”⁸, la cual generó graves consecuencias sociopolíticas mediante el debilitamiento del sector minero estatal y el vaciamiento de políticas productivas orientadas al sector, impactando también en la organización y formación sindical. Sin embargo, a principios de 1990 las y los trabajadores obreros y campesinos lograron reorganizarse y aliarse bajo el formato de organizaciones barriales y sindicales. Al mismo tiempo, la migración rural-urbana se profundizó, lo cual aportó a la reconfiguración de las

⁵ Reforma que establece la creación del Sistema Educativo intercultural, plurilingüe, universal, participativo y gratuito en todo el territorio nacional.

⁶ Con participación campesina-indígena (Anria, 2019), la reforma agraria fue impulsada por la clase obrera boliviana (Trimboli y Rosemberg, 29/09/2022) y modificó la estructura de propiedad y producción de las tierras, eliminando el latifundio, la servidumbre y la estructura económica feudal, lo que promovió el acceso a la misma para la producción campesina.

⁷ Desde los años de su independencia hasta la actualidad, Bolivia ha conocido más de 188 Golpes de Estado (Lambert, 2019), siendo el país de Latinoamérica con más antecedentes vinculados.

⁸ Con los antecedentes doctrinarios impulsados desde la Universidad de Chicago por los economistas Hayek y Friedman en sus teorías de liberalización económica implementadas en la Dictadura chilena, se atribuye la expresión “terapia de choque” al economista Jeffrey Sachs, después de asesorar al Gobierno de Sanches de Lozada en la aplicación de un programa económico ortodoxo en la Bolivia de 1985. La misma refiere a la implementación conjunta de una serie de políticas económicas que implican la aplicación de un paquete neoliberal de medidas como son la liberación y unificación cambiaria; el aumento y desregulación de los precios de los combustibles, bienes y servicios básicos; el congelamiento de los salarios; la reducción de la inversión y el gasto público; el ingreso de capitales extranjeros privados; y las privatizaciones de recursos naturales, entre otras acciones (Curcio, 15/06/2021).

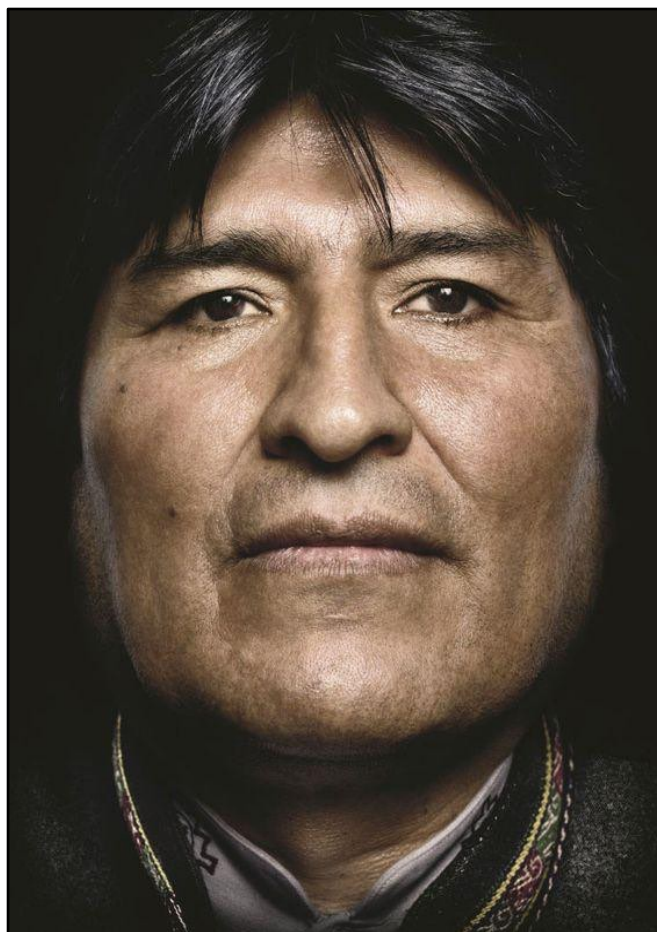
periferias bolivianas y a la consolidación de nuevas demandas por acceso a bienes y servicios básicos, en un contexto de altos índices de desigualdad, pobreza y desempleo (Anria, 2019). Dentro del paquete de reformas neoliberales impulsadas en estos años, la descentralización de las áreas claves de la política pública fomentó la participación ciudadana a nivel municipal que, junto a la Ley de Participación Popular de 1994, posibilitó la representación política y social, reconociendo legalmente la multiplicidad de formas organizativas comunitarias a escala local.

La crisis social se vio agudizada con la presión de empresas transnacionales y la supervisión de organismos internacionales de crédito sobre la acción de un Gobierno funcional a dichos intereses, lo cual revitalizó el periodo de movilización de masas entre los años 2000 y 2005 (Silva 2009; Anria 2013 de Anria, 2019). Permeado por un contexto de duras condiciones materiales de existencia para las mayorías populares, las sublevaciones y levantamientos protagonizados por obreros/as, campesinos/as e indígenas y también por clases medias (Gamboa Villaroel, 2012) visibilizaron los rasgos identitarios de gran parte del pueblo boliviano organizado. Parte de este proceso se expresó en la importante lucha política traccionada desde estos sectores en torno al acceso y las restricciones a los recursos naturales nacionales en las denominadas Guerra del Agua y Guerra del Gas bolivianas. La primera consistió en una serie de protestas sociales con epicentro en las yungas de Cochabamba a inicios del 2000. El motor principal fue la privatización del abastecimiento de agua potable a nivel municipal, lo que movilizó la acción colectiva de sindicatos tradicionales, la Coordinadora del Agua y las bases, logrando oponer resistencia a las privatizaciones y los cambios en la legislación vinculada (Kruse, 2005).

Por su parte, la denominada Guerra del Gas fue un conflicto social desarrollado durante el año 2003 con centro en El Alto, La Paz. Fue protagonizada por un masivo levantamiento popular indígena en contra de la exportación de gas oriundo de Tarija por puertos chilenos, decisión impulsada por el Gobierno de Coalición de Sanchez de Lozada y Carlos Mesa (2002-2003). Estas manifestaciones se extendieron por el resto del país a partir del fortalecimiento de las redes sociales solidarias interbarriales e interorganizacionales, fomentando la construcción de liderazgos locales y gobiernos barriales sólidos (Mamani, 2003). Dichas instancias organizativas, impidieron el avance de la medida y expresaron la disconformidad de la ciudadanía con el gobierno de turno, quien había intentado acallar sus voces mediante la represión y el recrudecimiento de la violencia institucional, hasta que sin camino alternativo en octubre de 2003, presentaron la renuncia a la presidencia.

Estas luchas de las bases organizadas son parte de la trayectoria del MAS como movimiento popular de representación de masas, albergando en su historia colectiva, las estrategias, prácticas y sentidos reivindicativos en los procesos que le dieron origen y le atribuyen una identidad propia. El MAS, como el segundo partido basado en movimientos sociales de Bolivia, logró consolidarse en menos de una década como un amplio movimiento con adhesión y representatividad social y política a nivel nacional (Anria, 2019), a partir de un discurso étnico y de clase que incluyó transversalmente al conjunto de las mayorías populares bolivianas. Mediante el liderazgo del líder aymara cocalero Evo Morales Ayma, el MAS llegó al Gobierno

Nacional y ejerció el poder durante tres períodos presidenciales desarrollados entre los años 2006-2019. A través de su programa socioeconómico posicionó a Bolivia en uno de los países más pujantes de la región. Las medidas más importantes impulsadas fueron la nacionalización de empresas (como aeropuertos, energía eléctrica) y de recursos naturales (como gas natural, litio y agua); la reducción de la pobreza extrema que pasó del 38% en el 2006 al 17% en el 2017, mientras se triplicaron las inversiones en salud y educación; el aumento del PBI; la implementación de políticas de soberanía que disminuyeron las tasas de endeudamiento externo; y la reforma constituyente del año 2009 que, mediante la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, sentó las bases legales y reales para la construcción de una comunidad pluricultural, incluyendo a sectores históricamente subalternos y visibilizando las tradiciones plurinacionales y los derechos de los pueblos indígenas.



Evo Morales Ayma, Presidente de Bolivia 2006-2019.

En estos hechos de gran relevancia histórica para Bolivia se puede visualizar la presencia de intereses nacionales y extranjeros en pugna, la participación indígena en las luchas sociales y la disputa en torno a los recursos naturales, la nacionalización de los mismos y el acceso a la tierra. En la formación política, social, económica y cultural de Bolivia hubo una diversidad de

factores históricos que fueron determinantes en el desarrollo nacional, teniendo gran relevancia el impacto de las movilizaciones campesinas e indígenas y el rol de los movimientos organizados para intervenir en la construcción de la agenda pública y en las decisiones de gobierno. En la Bolivia de la posguerra, el sujeto campesino-indígena luchó históricamente por salir de la sucesiva marginalización y exclusión social, económica y política del país, consolidando su visibilización y reconocimiento como actor social organizado a inicios del segundo milenio. La Bolivia de los siglos XX y XXI sintetiza así una historia que compone un heterogéneo mosaico étnico-cultural, lingüístico y social (Ranincheski y Da Silva, 2012), donde los sectores campesinos, indígenas y obreros se conformaron como agentes políticos centrales de cambio.

Análisis del MAS desde la teoría de los movimientos sociales

En su trabajo titulado “When Movements Become Parties. The Bolivian MAS in Comparative Perspective”, Anria (2019) realiza un estudio comparativo entre las experiencias del MAS en Bolivia (2005-2019), el PT en Brasil (2003-2016) y el Frente Amplio en Uruguay (2010-2015). Con el objetivo de elaborar producciones analíticas propias de la región, el autor enfatiza particularmente en la experiencia popular boliviana en búsquedas de corroborar si se aplica al caso la denominada Ley de Michels (1962). En el campo de estudio de los movimientos sociales, esta ley hace referencia a que la naturaleza de las estructuras político-partidarias lleva inevitablemente a la oligarquización y jerarquización de los partidos políticos, que reproducen dinámicas de poder verticalistas y descendientes, lo cual amplía la distancia entre las cúpulas partidarias y sus bases, debilitando a éstas últimas. Esta lectura forma parte implícita de las corrientes teóricas y militantes que ponderan la reproducción de los movimientos sociales en base a la autonomía del Estado y de su estrategia identitaria. Retomando a Longa (2019), las mismas plantean que los movimientos sociales que alcanzan el poder estatal se burocratizan y son cooptados por el Estado, lo cual condicionaría sus objetivos transformadores y afectaría su libertad y autodeterminación (Ferrara, 2003; Munck, 1995; Sitrin, 2010).

Mediante el análisis de las causas históricas, vinculadas al origen y trayectoria del movimiento social, y las causas constantes, relacionadas a los ejes que acompañan el proceso de conformación del movimiento, Anria (2019) observa dos aspectos claves para comprender la llegada al poder del MAS en Bolivia: la selección de candidatos y las políticas públicas desplegadas por una estructura partidaria basada en movimientos sociales. En relación con el primer aspecto, establece que en territorios donde el MAS no tenía fuerza local propia de las bases para construir y seleccionar al candidato “desde abajo” -como sí sucedía por ejemplo en El Alto, La Paz-, la estructura partidaria generó la instancia electoral eligiendo al candidato “desde arriba” -como sucedió en el Depto. de Santa Cruz-. Esto expresa el modo en que la influencia territorial de la sociedad civil organizada y alineada con la estructura política partidaria, beneficia tanto las instancias de participación de las bases como la legitimidad

adquirida por el partido y sus representantes, siendo estratégico el accionar cuando la sociedad civil se encuentra débilmente organizada, lejana y desarticulada a la estructura partidaria.

Con relación al segundo aspecto, el autor plantea desde una mirada amplia que la anatomía del MAS como partido político, se estructuró en base a áreas con perfiles puramente político-técnicos específicos -como sucedió en el Ministerio de Economía o en la Vicepresidencia-, y en otras áreas le otorgó espacios de decisión a los movimientos de base, campesinos e indígenas, posibilitando la participación de estos agentes en el poder. A través de estos elementos, entre algunos otros, el autor concluye que las bases del MAS tuvieron capacidad de influencia, decisión, veto y determinación de las acciones impulsadas desde la cúpula partidaria, mostrando la capacidad de escucha, negociación y adaptación del líder en representación del partido basado en movimientos, para mantener la cercanía de la estructura con sus bases y ampliar los canales de participación popular. De este modo, Anria (2019) desmiente que en el caso del MAS boliviano se aplique la frase “quien dice organización, dice jerarquía”, comprobando que, en esta experiencia particular, no se aplica la Ley de Michels como reflejo de las vertientes de los “movimientos cooptados por el Estado”. De esta manera, la potencia del estudio llevado adelante por el autor en torno a la emergencia del nacionalismo plebeyo (Stefanoni, 2003) y su llegada al poder en Bolivia, se halla en los matices de movimientos que apoyan al partido político gobernante; las formas de llegar al poder estatal; el intercambio entre la cúpula y las bases; y la construcción de las bases electorales.



*Movimientos sociales y comunidades indígenas en respaldo al Presidente Evo Morales Ayma. Cochabamba, Julio 2013.
(Fuente imagen: Wikimedia Commons, Revista Jacobin Lat)*

Desde esta perspectiva, el MAS boliviano surge como instrumento para la representatividad y la participación política del sector campesino indígena, siendo sus

principales bases sociales impulsoras, los trabajadores cocaleros de las zonas rurales, quienes constituyeron su *core constituency* (Gibson 1996), es decir la identidad política y base electoral del movimiento, posicionándose en contra de las decisiones de los gobiernos neoliberales que afectan a las grandes mayorías. Aplica al desarrollo histórico del MAS, la definición de Tilly y Tarrow (2015) acerca de los movimientos sociales, quienes los comprenden como campañas sostenidas de reivindicación que utilizan actuaciones públicas mediante diversas estrategias de movilización y comunicación (manifestaciones, reuniones y declaraciones públicas), generadas a partir del apoyo de organizaciones, redes, tradiciones y solidaridades que conforman su base y sustentan las actividades. Mediante diversas estrategias de movilización, protesta y organización en contra de la acción gubernamental privatizadora -fundamentalmente en los años 2000-, dichos sujetos políticos organizados se consolidaron territorialmente primero a nivel local en la zona del Chapare, para luego posicionarse como líderes al interior de la cúpula partidaria del MAS a nivel nacional. Su rápido despliegue territorial estuvo relacionado con la vinculación, la generación de alianzas y el trabajo conjunto con diferentes grupos organizados sectorialmente, abonando al armado de una gran coalición rural-urbana (Anria, 2019) desplegada en gran parte del territorio.

Otras características distintivas constituidas desde los primeros años de la formación de este partido basado en movimientos sociales, se vinculan con: la flexibilidad y fluidez para relacionarse con otros actores sociales organizados; la baja burocratización y centralización del poder en la cúpula; su nivel de pragmatismo multidimensional en la gestión, y la puesta en marcha de “un modelo híbrido que combina tanto el liderazgo descendente como el poder ascendente de la movilización social autónoma de los grupos populares” (Anria, 2019:19). El origen y trayectoria de las organizaciones sociales de base del MAS, han logrado contrarrestar las tendencias a centralizar el poder político, generando demandas concretas a partir de su autonomía, capacidad de organización y movilización, las cuales moldearon el modelo organizativo del partido, tanto previamente como durante su gestión a nivel nacional, y propulsaron la distribución interna del poder mediante la conformación de la agenda pública conjunta.

Dichas características se visualizan en múltiples circunstancias durante la gestión del MAS en el Gobierno. En este caso, tomaremos dos ejemplos empíricos concretos sucedidos en ambos periodos de su gobierno. En primer lugar, el proceso de consolidación de la Reforma Constituyente implementada a partir del año 2009, se encarna como parte de las medidas emblemáticas impulsadas por los movimientos sociales campesinos e indígenas, construida mediante su lucha histórica y reivindicativa a través de su participación y representación política. Dicho proceso fue llevado adelante a partir del año 2006 mediante la ley aprobada en el Congreso Nacional, que dispuso la tarea de sentar las bases para la construcción de un Estado *de nuevo cuño* (Gamboa Villaroel, 2012). Mediante la misma “se dispuso a convocar para elegir ciudadanos, vía partidos políticos y asociaciones ciudadanas” (Gamboa Villaroel, 2012; 49) para la conformación de la Asamblea Constituyente. Su trabajo se encontró ceñido por conflictos y

disputas entre diversos sectores hasta que se consiguió la aprobación de la propuesta constitucional en el referéndum ciudadano de febrero del año 2009.

La Reforma constitucional junto con la nacionalización de los recursos naturales hidrocarburíferos formó parte prioritaria de la agenda de demandas consolidada por los movimientos sociales por medio de la ocupación de la calle en la revuelta popular de octubre del año 2003. Esto se conforma como un antecedente importante, sumado también a la composición y trayectorias de quienes formaron parte del gabinete de gestión del MAS, el cual estuvo constituido por líderes cocaleros ligados a la Guerra del Gas y del Agua, representantes vecinales de la ciudad de El Alto, referentes de organizaciones sociales y sindicales relacionados a diversos sectores productivos, así como lideresas vinculadas a organizaciones de defensa de los derechos humanos (Cuba Rojas, 2006). De esta forma, la inclusión al Gabinete de actores relevantes en comunicación con sus bases formó parte de la viabilidad política y social para la concreción del denominado Proceso de Cambio liderado por Evo Morales (Schneider, 2020), el cual no estuvo exento de tensiones y conflictos entre fracciones de fuerzas con intereses contrapuestos.

La conformación de la Asamblea Constituyente y de la propuesta constitucional supuso un proceso de construcción de una agenda interna con ejes de vital importancia para la nueva estructura estatal, como fue la incorporación de la autonomía indígena originaria campesina (AIOC)⁹ en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE). Este elemento junto a la democracia intercultural, fueron los pilares fundamentales que definieron el carácter plurinacional del nuevo Estado boliviano (Ugarte, 2018). Este punto involucró múltiples instancias de organización, tanto al interior de la estructura político-partidaria del MAS desde sus bases, hasta la acción legislativa en el Parlamento; como al exterior, en la demostración de fuerzas de apoyo mediante la acción colectiva organizada en diversas regiones. Pese a que este proceso estuvo colmado de tensiones políticas y sociales que incluyeron a autoridades y movimientos sociales tanto del MAS como del Oriente Boliviano¹⁰, éste se consolidó a partir de la participación activa de fuerzas sociales impulsoras de la Asamblea como fueron “el Movimiento Sin Tierra, los cocaleros del Chapare y las Yungas, los mineros cooperativistas de Oruro y Potosí, y finalmente las Juntas Vecinales de El Alto de La Paz (...) además de los movimientos indígenas propiamente tales, sobre todo de aquellas tierras comunitarias de origen (TCO) que demandaban a través de la Asamblea Constituyente un mejor ordenamiento territorial conforme a sus ‘usos y costumbres’” (Cuba Rojas, 2006;60).

Comprendiendo la importancia de este espacio político asambleario para la construcción de la nueva Carta Magna, y de esta medida para la sociedad boliviana y sus comunidades indígenas originarias, el MAS garantizó su llegada territorial mediante sus

⁹ No es objeto de este trabajo ahondar en el análisis y discusiones respecto a las AIOC, tema que requeriría un desarrollo específico. Para profundizar al respecto, se sugiere ver Órgano Electoral Plurinacional y Tribunal Supremo Electoral (2018) “Diversidad institucional: autonomías indígenas y Estado Plurinacional en Bolivia”. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 1a ed. La Paz.

¹⁰ Correspondiente al Depto. de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando (Schneider, 2020).

representantes locales y/o regionales amparados por la elección de los mismos por amplios sectores campesinos, mineros y otros espacios sindicales (Cuba Rojas, 2006). A ello se sumó también, la participación del Pacto de Unidad como estructura organizacional con trayectoria de lucha consolidada en 2004 que aunaba a múltiples organizaciones de origen campesino e indígena. A pesar de las diferencias internas, estas compartían agendas comunes y demandas de inclusión y reconocimiento étnico, territorial y político, lo que las llevó a constituirse en la Coordinadora Nacional para el Cambio (CONALCAM)¹¹ en el año 2007 (Schneider, 2020). Dicha decisión fue tomada en la conflictiva coyuntura de organización y armado de la Asamblea Constituyente, siendo la resistencia presentada por la oposición (integrada por las fuerzas cívico-regionales del oriente boliviano), las que motivaron la consolidación del espacio para llevar adelante la reforma constitucional planteada y sostener la acción impulsada por el MAS en el gobierno. Esta no es una cuestión menor, considerando que la CONALCAM se conformó como una “instancia de coordinación integrada por representantes de las diferentes organizaciones matrices junto con integrantes del Poder Ejecutivo, del legislativo y representantes de la convención constituyente” (Schneider, 2020;s/n). Se consolidó, así, como un lugar de co-construcción y trabajo conjunto, pero también como lugar de resistencia y lucha para generar la correlación de fuerza necesaria destinada a la elaboración final de un documento constitucional que involucre la agenda de los movimientos indígenas del país.

Así es que en el marco asambleario, el Pacto de Unidad realizó una serie de propuestas vinculadas a las AIOC, planteando sus elementos constituyentes como fueron “la integralidad territorial, las estructuras orgánicas, los sistemas de gobierno indígena originario, las normas y procedimientos propios, la libre determinación, las atribuciones autonómicas, las competencias en igual jerarquía dentro del nivel subnacional y los recursos necesarios para el funcionamiento del gobierno autónomo” (Sanjinés, 2010;96). Para su armado, cada organización generó una propuesta política que fue resultado de un intenso proceso de consulta, discusión y construcción participativa en sus diversos territorios y comunidades. De esta forma, las propuestas unificadas y consensuadas fueron presentadas en Oruro mediante el texto original de la actual CPE, pero fruto de las negociaciones y la construcción de consensos entre el oficialismo y la oposición, se aplicaron modificaciones en varios artículos para su aprobación definitiva, primero en el Congreso y luego mediante el referéndum ciudadano.

¹¹ “Esta entidad se hallaba constituida por una serie de organizaciones campesinas e indígenas: la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa (CNMCIOB-BS), la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), el Movimiento de Trabajadores Campesinos Sin Tierra de Bolivia (MST-B), la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB) y la Asociación Nacional de Regantes y Sistemas Comunitarios de Agua Potable y Saneamiento (ANARESCAPYS)” (Schneider, 2020).

De esta manera, con la promulgación de la Constitución Política del Estado de 2009 y la consiguiente promulgación en el año 2010 de las leyes orgánicas como la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, y la Ley de Régimen Electoral, para el año 2019 lograron constituirse como Gobiernos Autónomos Indígenas Originarios Campesinos (GAIOC): el Territorio autónomo Guaraní Charagua Iyambae, el Territorio quechua de Raqaypampa y la Nación Originaria Uru Chipaya. A la misma fecha más de treinta procesos iniciaron las gestiones para solicitar el acceso a la AIOC, posibilitando la construcción de un sistema de organización territorial del Estado que reconoce la pluriculturalidad y las autonomías departamentales, municipales, regionales e indígenas (Órgano Electoral Plurinacional y Tribunal Supremo Electoral, 2018).

En su conjunto, se puede decir que tanto la instancia de participación interna de las organizaciones nucleadas bajo el Pacto de Unidad (luego conocida CONALCAM), como los espacios de movilización social en los momentos de conflicto con fuerzas políticas opositoras, fueron acciones claves impulsadas por las bases del MAS y sus cuadros medios (locales y/o departamentales) para incidir en la toma de decisiones durante el Proceso Constituyente. Esto dio un lugar activo a las bases sociales de sustentación del movimiento, en articulación con la cúpula del MAS, para lograr incluir las demandas de los grupos que estuvieron al margen del accionar de los partidos políticos tradicionales en tiempos anteriores. De este modo, la presencia de movimientos sociales en la Asamblea Constituyente se conformó como un proceso significativamente importante en la región, que aportó a la construcción de una agenda de participación en búsquedas de la descolonización en sus prácticas y resultados, y en post de la ampliación de derechos sociales y políticos para todos/as. Junto con la profundización de una democracia participativa mediante consultas populares, se promovió la autorrepresentación sociopolítica (Svampa, 2007) de vastos sectores sociales, lo que contribuyó a la posibilidad de pensar nuevas formas institucionales de Estado-sociedad organizada.

Otro suceso en el que se visualiza la construcción de la agenda política del Gobierno del MAS y la capacidad de influencia de las bases sociales, no necesariamente alineadas ideológicamente a las cúpulas del movimiento, fue la reacción de gran parte del pueblo boliviano frente al Decreto Supremo 748 sancionado el 26 de diciembre del año 2010. En el marco del segundo periodo de gestión del MAS en el Gobierno, el alza de los precios de los hidrocarburos y sus derivados a partir de la remoción del subsidio a los mismos, generó entre los días 27 y 31 de diciembre, múltiples movilizaciones, protestas y pronunciamientos en diversas regiones de Bolivia (como en Oruro, Sucre, Potosí, Beni y Tarija). El fundamento oficial de la quita de la subvención establecida desde el gobierno de Sánchez de Losada en adelante, se vinculó con el beneficio a los ricos y los contrabandistas de combustibles que no lo necesitaban, lo cual venía afectando las tasas de recaudación e ingresos del Estado (Blanco, 2011).

La medida fue apoyada por el MAS, la CSUTCB, el sindicato de trabajadores petroleros y la Confederación de Mujeres Campesinas de Bolivia "Bartolina Sisa" (Blanco, 2011). Pese a que el decreto se acompañó con el anuncio del aumento de los salarios por encima de la inflación, diversos sectores sociales que iban desde el sindicato de choferes, organizaciones

aliadas al gobierno hasta la oposición política, ejercieron presión mediante herramientas de visibilización y protesta para limitar la medida. Luego de una semana y de una serie de reuniones entre el Gobierno y varios de los movimientos sociales involucrados en las movilizaciones, el decreto 748 fue finalmente derogado el 31 de diciembre del año 2010 (Blanco, 2011). Para dicho anuncio, Evo Morales retomó “el ideologema zapatista con el que había inaugurado su gobierno el 22 de enero de 2006 (...), pero se mantuvo firme en su consideración: ‘qué lindo es obedecer al pueblo. Sólo obedecí (...) pero tarde o temprano se dará cuenta, porque sabe que es una medida en bien de las nuevas generaciones’” (Blanco, 2011).

Pese a los conflictos y contradicciones propias de las complejidades que atraviesan a los procesos sociopolíticos, en ambas instancias desarrolladas se puede observar la capacidad de gobernabilidad del MAS boliviano en base a una forma específica de ejercer la práctica política. **Es a partir del intercambio entre la cúpula y sus bases; la construcción de poder político y ciudadano “de abajo hacia arriba”; la flexibilidad para la vinculación y la construcción de acuerdos con diversos sectores sociales para garantizar la legitimidad de las medidas, que se construyó la experiencia institucional. Así, la descentralización del poder político garantizó la participación democrática y la posibilidad de decisión compartida frente a instancias decisivas fundamentales, dando lugar a las repercusiones de la acción performativa de las bases sociales en la gestión del Estado.** De esta forma, desde su conformación inicial, pasando por su etapa de institucionalización y a lo largo de su trayectoria organizativa, el MAS como movimiento social se expresa a partir de una actuación concertada con un grado de permanencia determinado, en torno a la aceptación de creencias comunes entre sus integrantes que genera una conciencia grupal específica (Pérez Ledesma, 1994). Se forja así una iniciativa sociopolítica mediante la estructura movimientista que llega a consolidar y visibilizar sus demandas a favor de los cambios en la distribución y ejercicio del poder público.

Como plantea Pérez Ledesma (1994): “la acción colectiva encarnada en los movimientos sociales no era menos racional que las actividades convencionales de las organizaciones formales” (63). Con esto se retoma lo planteado por diversos estudios que, desde la década del 70, giran en torno a la importancia de desmitificar la idea de que los movimientos sociales difieren de las organizaciones formales por el pragmatismo, el peso ideológico, la emocionalidad y la no-racionalidad¹². A partir de estas intervenciones conceptuales, los movimientos sociales dejaron de verse como un conjunto de individuos desviados que “se salen de la norma”, para ser vistos como grupos organizados con objetivos estratégicos concretos que persiguen la consecución de un bien colectivo, y se conforman como una vía establecida para la participación y la influencia en el campo de la política (Tilly; Cohen; Olson; de Pérez Ledesma, 1994). De esta forma, experiencias como el MAS entre tantas otras, demuestran que los movimientos sociales requieren de una estructura, valores, intereses y cálculos racionales para

¹² Esta idea fue trabajada por algunas primeras miradas surgidas en contextos y sociedades altamente institucionalizadas.

consolidarse, cumplir sus objetivos y funcionar como tales, lleguen o no a ejercer el poder desde el espacio estatal.

Desde el paradigma orientado hacia la comprensión de los movimientos sociales como actores racionales, se puede leer la experiencia organizativa del MAS en Bolivia en base a la teoría de la movilización de recursos. En función de la propuesta teórica construida por Mc Adam, McCarthy y Zald (1999), se incorpora la importancia de la organización y la prosperidad como nodos fundamentales para que surja un movimiento social, ya que los recursos organizativos disminuyen costes de la participación de los miembros, facilita el reclutamiento y nuevas adherencias, y aumenta el éxito de la acción colectiva (Pérez Ledesma, 1994). La prosperidad por su parte, promueve la aparición y el auge de los movimientos sociales debido a que permite disponer de mayores recursos tanto en términos de masividad y nuevas participaciones, como en términos materiales (Pérez Ledesma, 1994).



Desde esta perspectiva entonces, se puede estudiar la experiencia del MAS en Bolivia en base a tres pilares fundamentales: la estructura de oportunidades políticas; las formas de organización y estructuras de movilización; y los procesos enmarcadores. Se parte de comprender a estos ejes como herramientas analíticas que, de manera integrada, arrojan luz sobre los recursos movilizados por los actores para instalar temáticas en la agenda pública y posicionarse como parte activa en el campo de la lucha política. Es constante así la interrelación y el dinamismo que se halla entre el individuo, la organización y el contexto, ya que en determinados momentos una parte de la estructura juega un rol preponderante que las demás en el escenario mayor, en función de circunstancias coyunturales, condiciones de los recursos, participación individual y colectiva, entre otras. Desde esta clave, se entiende a las *estructuras de oportunidades políticas*, como las condiciones políticas para accionar por parte de los movimientos, teniendo en cuenta los cambios institucionales, las relaciones informales de poder en una estructura determinada, y “las características políticas de los estados nacionales en los

que se inscriben” (Mc Adam et. al., 1999;24). Esto involucra tanto la dimensión estructural como las capacidades del sujeto movilizado, poniendo en el centro la interacción entre los movimientos sociales y la política institucionalizada.

Por su parte, las *formas de organización y la estructura de movilización* refieren a “los canales colectivos tanto formales como informales, a través de los cuales la gente puede movilizarse e implicarse en la acción colectiva” (Mc Adam et. al., 1999;24). En este sentido, la subcorriente asumida hace hincapié en los recursos intelectuales, políticos, logísticos, económicos, culturales, sociales y de liderazgos sobre los cuales se construyen y posicionan los movimientos sociales en los grupos de nivel medio, organizaciones y redes que constituyen su base colectiva. Por último, los *procesos enmarcadores* aluden a los significados culturales y conceptos compartidos entre los sujetos sociales, por medio de los cuales se define y entiende la situación social, lo cual motoriza a posteriori la acción práctica y la intervención pública conjunta. En el campo de estudio en cuestión, se conoce a este concepto como *frame*, como aquello que violenta o agrede a un conjunto social y promueve la acción organizada. La dimensión cognitiva e ideal-valorativa de los sujetos toma relevancia así, al momento de relevar los elementos culturales influyentes en la conformación de nuevos movimientos sociales con voluntad de ruptura respecto al pasado.

Para hacer referencia a la estructura de oportunidades políticas en la experiencia del MAS, es que, en el marco de un análisis retrospectivo de los sucesos históricos bolivianos, el contexto de oportunidades políticas contribuyó al surgimiento del MAS como movimiento de masas organizado. En términos históricos, a mediados del siglo XX con la asunción del MNR en el Gobierno, se generaron las condiciones materiales para que los sectores populares participaran activamente en la realidad política y sindical nacional. Esto fue acompañado por la amplitud de derechos sociales que los atañen, pasando por la resistencia en los años dictatoriales y la consecutiva reorganización de las bases políticas y sindicales a fines de la década del 70. La propulsión de instancias de reivindicación de derechos frente a la degradación social profundizada por el ya iniciado ciclo neoliberal, fueron motor y parte así del surgimiento del movimiento.

Los años 80 y 90 signaron de dificultades la estructura política con la profundización de las políticas de desfinanciamiento y privatizaciones de áreas claves del sector económico-productivo, lo que impulsó junto con la inclusión de nuevos fenómenos sociales y regulatorios¹³, la reconfiguración de las bases sociales antes fragmentadas. La agudización de estos y otros procesos signados por las Guerras del Agua y del Gas, motivó el surgimiento de organizaciones vecinales y asociaciones barriales que, aliados a los movimientos sociales, aunaron fuerza en las calles para hacerle frente a las medidas gubernamentales. Estas condiciones sistémicas demandaron la organización de los sectores populares en favor de la defensa de sus derechos, dándole forma a una larga tradición de lucha y organización en los diferentes periodos

¹³ Como, por ejemplo, los procesos de migración interna rural-urbana y la legislación nacional de descentralización y participación política popular.

históricos. De esta manera, la incursión electoral del MAS no fue más que una respuesta necesaria para poner en práctica y legitimar las demandas populares largamente respaldadas por vastos conglomerados sociales.

Estos hechos que van desde el surgimiento, fortalecimiento, fragmentación, latencia y reconfiguración de las iniciativas sociales organizadas, se vieron determinados entonces por elementos que son parte de las estructuras de oportunidades políticas, manifiestas a lo largo de la experiencia boliviana en los cambios gubernamentales y los agentes detentores del poder. Desde esta óptica, también lo son los cambios normativos-reglamentarios que promovieron - por promoción o resistencia- la organización social; la cohesión de las élites políticas en el gobierno (a pesar de sus fallas, como con el MNR) y de los sectores populares excluidos (como en los años 90); y la rigidez o flexibilidad del sistema político. Según cada momento histórico los movimientos sociales pudieron detectar caminos de influencia y delinear estrategias de acción para la transformación. De esta forma, las nuevas realidades sociopolíticas abonaron al surgimiento de nuevas demandas sociales, condensadas en nuevas formas organizativas como lo fue el MAS, basadas en reivindicaciones comunes y relaciones sociales de fraternidad. La estructura incitó así a la movilización del campesinado-indígena, que se conformó con el MAS a la cabeza como un actor político clave en la realidad boliviana de los últimos 30 años.

Por otra parte, las formas de organización y la estructura de movilización en la experiencia empírica del MAS se expresan a través de los recursos culturales y políticos desplegados a partir de sus múltiples batallas impulsadas. Mediante las narrativas consolidadas en base a un discurso étnico-histórico; y las luchas reivindicativas con perspectiva de derechos, se unificaron los intereses de las mayorías populares bolivianas, fortaleciendo un discurso propio. Esto se observa en los liderazgos asumidos desde la militancia campesina-indígena al frente del movimiento para llevar adelante la acción popular en las calles y luego dar las batallas electorales que permitieron el triunfo de la propuesta política. También, en los recursos intelectuales que posee el partido movimientista a partir de su composición técnica-profesional especializada perteneciente a sectores intelectuales que desde el año 2000 absorbió y contribuyó al reverdecer de la participación popular (Fornillo y Canavese, 2013).

La unificación estratégica de quienes aportaron a la organización desde su trayectoria militante, académica y movimientista, generó la conjunción necesaria para dar la batalla institucional que logró la victoria presidencial en los tres periodos de gestión del MAS boliviano. Esto, acompañado de recursos políticos, logísticos y económicos generados a partir de la representación municipal progresiva en pequeños territorios; el control de los presupuestos municipales; la ocupación de bancas en el Parlamento por las vías democráticas; y la llegada de sus demandas a los medios públicos (Archondo, 2009), junto a sus fuertes bases sociales de sustentación, permitieron la consolidación del partido en sus diferentes momentos organizativos hasta su victoria electoral. Gracias a la movilización y puesta en juego integral de estos recursos, es que el partido político logró la sostenibilidad y legitimidad en el tiempo para gobernar durante los tres periodos presidenciales, ganándose enemigos en las filas de la oposición conservadora boliviana.

Respecto a los procesos que enmarcaron socio-culturalmente la acción colectiva del MAS en Bolivia, desde su conformación hasta su triunfo electoral, se reconoce el trabajo de las organizaciones de base y de los líderes populares del movimiento. Se trabajó sobre la problematización social a través de diversos medios (comunicación, protesta, cortes de ruta, etc.) en torno al lugar otorgado socialmente a la trayectoria popular histórica del país, vinculada a las tradiciones indígenas-campesinas y al trabajo de los sectores laborales postergados, particularmente mineros. En términos individuales y subjetivos, las condiciones materiales de existencia mediatizadas por las decisiones políticas en pleno neoliberalismo hasta el segundo milenio, llevaron a estos sectores a comprender que la gestión de lo público se distanciaba de los intereses nacionales, lo que generalizó el involucramiento político y el interés por la participación ciudadana, en un país con altos niveles de organización comunitaria indígena. Esta cuestión no es menor, ya que la identidad étnico-popular jugó un papel aglutinante fundamental en los procesos organizativos y de movilización durante todo el periodo. Se aúna a lo anterior, la forma comunitaria organizativa de origen tradicional de la región andina, basada en la célula social ayllu y su sistema de representación indígena. Dicha forma expresa en sí misma una gran potencia política a la hora de pensar los procesos de agenciamiento múltiple de la sociedad boliviana y también, de las comunidades migrantes organizadas bajo diversas formas asociativas en distintas regiones de Argentina.



Solsticio de invierno y bienvenida del Año Nuevo andino. Tiwanaku, La Paz. Junio 2011.

(Fuente imagen: Radio Kermes)

Como plantea Mc Adam, McCarthney y Zald (1999), se comprende a estos procesos enmarcadores vinculados a un movimiento social, como los “esfuerzos estratégicos conscientes realizados por grupos de personas en orden a forjar formas compartidas de considerar el mundo y a sí mismas que legitimen y muevan a la acción colectiva” (27). La comprensión desde las subjetividades acerca de la coyuntura que afecta la vida individual y colectiva se conforma, así como un proceso complejo poco estudiado que media entre las oportunidades, la organización y la acción concreta (Mc Adam et. al., 1999). En este sentido, con sus particularidades propias, los procesos organizativos tanto en Bolivia como en Argentina y en toda América Latina, llevan consigo la tradición histórica que alberga múltiples resistencias descolonizadoras, reivindicación de derechos y luchas políticas en el campo de las disputas de poder. Estos intereses nacionales y populares puestos en juego en la cotidianidad política, se impulsan en búsquedas de fortalecer los proyectos de autonomía, desarrollo y crecimiento de quienes, desde la época colonial, han quedado por fuera de las normativas, prácticas y políticas públicas estatales de los Estados Nacionales modernos. Esta cuestión, sumado a la necesidad de converger en la contingencia popular y a su vez, en la conformación de una burguesía nacional alineada con los intereses del país, se vuelve en la contemporaneidad un objetivo necesario y desafiante para los países de la región.

Como desarrollamos hasta aquí, la experiencia de institucionalización del MAS en Bolivia generó una propuesta sociopolítica que unificó las demandas de las mayorías populares. Mediante la llegada de este movimiento social de masas a la gestión del Estado, se volvió real la posibilidad de masificar y transformar en política pública las necesidades y proyectos de vastos sectores del campo social (Longa, 2019). Este proceso, que involucró tanto a las bases y las cúpulas del movimiento organizado como a la sociedad civil en su conjunto, inauguró una nueva etapa histórica para el país latinoamericano, logrando construir una agenda integral a partir de la implementación de políticas públicas que involucraron nuevas lógicas democráticas, nuevos vínculos entre capital-trabajo y nuevas relaciones sociales, mediante la descolonización de las mismas entre grupos culturalmente diversos (Órgano Electoral Plurinacional y Tribunal Supremo Electoral, 2018).

Conclusiones

Partiendo de comprender que los procesos contemporáneos le rinden tributo a su pasado y responden a las formas que ha tomado la lucha organizada articulada sobre la memoria corta y larga de los pueblos (Gamboa Villaroel, 2012), en el presente trabajo se retomó el proceso sociopolítico de Bolivia a modo de historizar los principales hechos sucedidos a lo largo del tiempo en el territorio. Esto, anexado con las experiencias de los principales partidos políticos basados en movimientos sociales de base, con eje en la acción del MAS planteada por Anria (2019), posibilitó desplegar un análisis desde diversas teorías que forman parte del campo de estudio de los movimientos sociales. El desarrollo en torno a la experiencia desde dicha perspectiva, sumado a los aportes de Tilly y Tarrow (2007), Pérez Ledesma (1994), Longa

(2019), Mc Adam, McCarthney y Zald (1999), nos permitió ahondar sobre diversas dimensiones que hacen a la experiencia organizativa del principal movimiento de masas de Bolivia en la contemporaneidad. Las herramientas conceptuales desarrolladas se vinculan principalmente con el origen y surgimiento del MAS como partido político basado en movimientos sociales; la presentación de ciertos aportes generados desde el campo de estudio de los movimientos sociales; junto a la estructura de oportunidades políticas, sus formas de organización, estructura de movilización y sus procesos enmarcadores que en su conjunto han permitido la continuidad, evolución e institucionalización de la experiencia, no sin tensiones y conflictos internos.

Mediante la lucha étnico-política consolidada, la experiencia del MAS en Bolivia se vuelve enriquecedora en la medida en que demuestra la posibilidad de construir poder popular desde abajo por medio de la acción performativa de la organización social y también de las estructuras políticas, institucionales y estatales. Los estrechos vínculos de las dirigencias con sus bases y otros grupos sociales organizados que ampliaron los canales de participación política y democrática en la iniciativa posibilitaron la construcción de agendas, políticas públicas y la toma de decisiones conjuntas. Se recupera aquí lo planteado por Anria (2019) para dar cuenta que la forma de gestionar el Estado depende, en parte, del modo en que se estructuró ese espacio político, territorial y vincularmente desde sus inicios.



Movilización popular en contra del Golpe de Estado de Noviembre del 2019, La Paz.

(Fuente imagen: Vía Campesina)

Esta forma organizativa ha empoderado a amplios sectores rurales y urbanos históricamente relegados, generando una ampliación de derechos elementales y posibilitando

su acceso al Estado, conformado ya desde una nueva perspectiva. Dichos sectores han podido instalar y solventar sus demandas, impulsando estrategias tanto por canales internos mediante su inclusión en las instituciones estatales, como externos a través de formas autónomas de movilización social.

En relación con lo anterior, la experiencia del MAS visibiliza la importancia que posee la historia política del país, su composición identitaria y configuración socio-territorial a la hora de comprender las vías de construcción organizativas, asociativas, institucionales y estatales como medios de gestión de lo social en los diversos puntos de la región. Durante las últimas décadas, se generaron vías de construcción popular y colectiva que profundizaron los mecanismos democráticos en base a la participación, la movilización social, la inclusión de las mayorías populares, y la comunicación entre las cúpulas partidarias y las bases. Esto es motivo de reconocimiento pese a los reiterados intentos de desestabilización recientes y los avances reaccionarios concretados en los últimos cuatro años desde el Golpe de Estado que irrumpió la gestión de Evo Morales en el 2019, lo cual demuestra, junto con el surgimiento de nuevos fenómenos y fracturas, que los equilibrios institucionales que solventan el sistema democrático se encuentran atravesados por constantes luchas, contradicciones e intereses.

Lo desarrollado en este ensayo intenta ser un aporte *para la reflexión sobre el esquema en el que se articulan trayectorias de organización popular y movimientos sociales, gobiernos nacionales, políticas estatales y mayorías populares. Esta tarea se motoriza con el afán de recuperar, desde ciertos desarrollos conceptuales, posibles claves que aporten al fortalecimiento democrático y a la reconstrucción del nuevo orden social, político y económico común. Es en base a los aciertos en las experiencias desplegadas desde nuestras latitudes en tiempos recientes, lo que, aunado a la capacidad de leer las nuevas demandas sociales, nos dará la llave para abordar y co-construir el desafiante futuro porvenir.*

Bibliografía

- Anria, Santiago (2019). "When Movements Become Parties. The Bolivian MAS in Comparative Perspective". Cambridge University Press. Introducción, capítulos 3 y 4.
- Archondo R. (2007). "La ruta de Evo Morales". Nueva Sociedad N° 209.
- Bascopé Sanjinés, I. (2010). "La incidencia del movimiento indígena originario en el proceso constituyente en Bolivia" en Memoria del Foro Internacional "Autonomías indígena originarias, procesos políticos del movimiento indígena en América Latina y en Bolivia". La Paz. pp. 87-104. Disponible en: https://biblioteca.clacso.edu.ar/Bolivia/cedla/20171023052107/pdf_345.pdf
- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (2012). "Procesos y Asambleas Constituyentes en América del Sur". Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones. Serie Informes N° 51-12. Disponible en: https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/15435/5/95406_No5_1-12-Procesos-y-Asambleas-Constituyente-s-en.pdf
- Blanco G. (2011). "Mandar obedeciendo al pueblo: argumentos en torno al "gasolinazo" de diciembre de 2010 en Bolivia". II Jornadas de Lógica Informal y Argumentación. Universidad Nacional de General Sarmiento, 26 y 27 de mayo de 2011. Disponible en: https://www.academia.edu/36127304/Mandar_obedeciendo_al_pueblo_Argumentos_en_torno_al_gasolinazo_de_2010_en_Bolivia_UNGS_2011
- Cuba Rojas, L. P. (2006). "Bolivia: movimientos sociales, nacionalización y Asamblea Constituyente". OSAL, año VI, no 19. CLACSO. Buenos Aires, Argentina. Disponible en http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/osal/201103_27105530/7rojas.pdf
- Curcio P. (15/06/2021). "Terapia de choque ¿solución mágica?". Revista Alainet. Disponible en <https://www.alainet.org/es/articulo/212654>
- Dunkerley, j. (2003). "Rebelión en las venas. La lucha política en Bolivia, 1952-1982". Ed. Plural. La Paz.
- Fornillo B. y Canavese M. (2013). "Política e intelectuales en la historia de Bolivia (1985-2012)". Historia y Espacio N° 41: 159-185.
- Ferrara, F. (2003). "Más allá del corte de rutas: la lucha por una nueva subjetividad". Buenos Aires: La Rosa Blindada/Pi.Ca.So.
- Gamboa Villaroel, M. F. (2012). "Acontecimientos internacionales y su incidencia en la reconfiguración del Estado en Latinoamérica". En Ana Arias (2012), "Políticas públicas y trabajo social: aportes para la reconstrucción de lo público". 1° Ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Espacio Editorial.
- Gibson, E. (1996) "Class and conservative parties. Argentina in comparative perspective". Baltimore: John Hopkins University Press.
- Kruse T. (2005). "La Guerra del Agua en Cochabamba, Bolivia: terrenos complejos, convergencias nuevas". Sindicatos y nuevos movimientos sociales en América Latina. Ed.

- CLACSO. Buenos Aires. Disponible en: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/gt/20101109025721/5kruse.pdf>
- Lambert R. (2019). “Un golpe de estado demasiado fácil en Bolivia”. *Le Monde Diplomatique*. Disponible en <https://mondiplo.com/un-golpe-de-estado-demasiado-facil-en-bolivia>
 - Longa F. (2019). “¿Cooptados o autónomos? Notas para revisar –y reorientar– los estudios entre movimientos sociales y Estado en la Argentina Contemporánea”, *Revista SAAP*, 13(2), pp. 257-282.
 - Mamani Ramirez P. (2003). “El rugir de la multitud: levantamiento de la ciudad aymara de El Alto y caída del gobierno de Sánchez de Lozada”. OSAL, Observatorio Social de América Latina. Ed. CLACSO. Buenos Aires. Disponible en: <https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/13437/1/2d1mamani.pdf>
 - McAdam D., McCarthy J. y Zald M. (1999). “Oportunidades, estructuras de movilización y procesos enmarcadores: hacia una perspectiva sintética y comparada de los movimientos sociales”, en McAdam Doug, John McCarthy y Mayer Zald (comp.), *Movimientos Sociales: perspectivas comparadas* (pp. 21-4). Madrid: Istmo.
 - Munck, G. (1995). “Algunos problemas conceptuales en el estudio de los movimientos sociales”. *Revista Mexicana de Sociología*, 3(57), 57-40.
 - Órgano Electoral Plurinacional y Tribunal Supremo Electoral (2018) “Diversidad institucional: autonomías indígenas y Estado Plurinacional en Bolivia”. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 1a ed. La Paz. 414 páginas.
 - Pérez Ledesma M.I (1994). “Cuando lleguen los días de la cólera, Movimientos sociales, teoría e historia” en *Zona abierta*. N° 69, pp. 51-120.
 - Ranincheski S. M. y Da Silva G. J. (2012). “Bolivia, siglos XX y XXI: Pluriculturalismo, indigenismo y política”. *Revista Relaciones Internacionales*. ISSN-e 2314-2766, Año 21, N°. 43, págs. 115-138.
 - Sanjinés I. B. (2010). “La incidencia del movimiento indígena originario en el proceso constituyente en Bolivia” en Memoria del Foro Internacional “Autonomías indígenas originarias, procesos políticos del movimiento indígena en América Latina y en Bolivia”. La Paz: CEDLA.
 - Schneider, A. M. (2020). “Tensiones económicas, políticas y sociales durante los gobiernos de Evo Morales. Una interpretación sobre el golpe de Estado”. Disponible en: <https://anuariodehistoria.unr.edu.ar/index.php/Anuario/article/view/283/329>
 - Sitrin, M. (2010). Horizontalidad, autogestión y protagonismo en Argentina. En *Historia Actual Online*, 21, 133-142.
 - Stefanoni, P. (2003) “MAS-IPSP: la emergencia del nacionalismo plebeyo”. CLACSO. Buenos Aires. Disponible en: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/osal/20110226122557/6d1stefanoni.pdf>
 - Tilly y Tarrow (2007). “Contentious Politics”. Universidad de Michigan. Ed. Paradigm Publishers.

- Trimboli, J. y Rosemberg, J. (29/09/2022), “Revolución Boliviana, 1952” (25). Audio podcast en Sonido Cultura: Un Poco Sucio. Ministerio de Cultura de la Nación. Argentina.
- Zavaleta Mercado, R. (1986), “Lo nacional-popular en Bolivia”. Ed. Siglo XXI. México.